



RESOLUCIÓN No. 0 8 2 5 28 JUN. 2012

Por la cual se decide el recurso subsidiario de apelación interpuesto contra la Resolución RES 12-1-0040 del 25 de enero de 2012, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C., *"por medio de la cual se resuelve la solicitud de Reconocimiento de la Existencia de una Edificación y de Licencia de Reforzamiento Estructural, para el predio ubicado en la CL 194 No. 45-20, Urbanización HACIENDA EL OTOÑO de esta ciudad."*

EL SUBSECRETARIO JURÍDICO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

En uso de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el artículo 42 del Decreto Nacional 1469 de 2010, 36 literal k) del Decreto Distrital 550 de 2006 y la Resolución 044 del 12 de enero de 2012,

CONSIDERANDO

Que el 4 de marzo de 2011, a través de la radicación No. 11-1-0195 el Club Campestre El Rancho, identificado con NIT 860010305- 4, representado legalmente por el señor Pedro David Urrea Mejía, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.078.588, solicitó ante la Curaduría Urbana 1 de Bogotá, reconocimiento de la existencia de una edificación en la modalidad de reforzamiento estructural, para el predio de la Calle 194 No. 45-20 de esta ciudad (folio 2).

Que el 25 de enero de 2012, el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C., expidió la Resolución RES 12-1-0040 por la cual resolvió *"Negar la solicitud de reconocimiento de existencia de edificación y de reforzamiento estructural presentada por el señor PEDRO DAVID URREA BERMUDEZ, identificado con cédula de ciudadanía 19.078.588, en su calidad de Representante Legal del CLUB CAMPESTRE EL RANCHO (...)"* (folios 267 a 273).

Que el 21 de febrero de 2012, el doctor Juan Carlos Procel Ramírez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.148.149, en calidad de apoderado especial¹ del Club Campestre El Rancho interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la citada Resolución, con los argumentos que se indican a continuación (folios 288 a 293):

Señaló que la providencia recurrida se fundamenta en una apreciación subjetiva porque en la misma se considera que de acuerdo al análisis de la solicitud de reconocimiento no se cumple con el término de cinco años de que trata expresamente el artículo 64 del Decreto Nacional 1469 de 2010 sin tener presente la excepción que de dicho requisito establece esta disposición al indicar *"Este término no aplicará en aquellos casos en que el solicitante debe obtener el reconocimiento por orden judicial o administrativa"*, desconociendo con ello lo ordenado por la Resolución 1086 de 2010² expedida por el Alcalde Local de Suba la cual en su artículo 3º *"advierte al querellado que*

¹ De acuerdo con el poder otorgado el 21 de febrero de 2012, ante la Notaría 5 de Bogotá (folio 297).

² "Por la cual se resuelve de fondo la actuación administrativa No. 131/2009 que se adelanta en contra del Club Campestre El



Continuación de la Resolución No. 0 8 2 5 28 JUN. 2012

Por la cual se decide el recurso subsidiario de apelación interpuesto contra la Resolución RES 12-1-0040 del 25 de enero de 2012, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C., *“por medio de la cual se resuelve la solicitud de Reconocimiento de la Existencia de una Edificación y de Licencia de Reforzamiento Estructural, para el predio ubicado en la calle 194 No. 45-20, Urbanización HACIENDA EL OTOÑO de esta ciudad.”*

dispone de un término de 60 días para que se adecue a las normas, obteniendo la licencia correspondiente o dejando el inmueble en las condiciones iniciales”.

Explicó que su representada procedió al cumplimiento de la orden impartida por la Alcaldía local de Suba y a pesar de haber impugnado la decisión radicó la solicitud de reconocimiento de existencia de una edificación y de licencia de reforzamiento estructural de que trata el expediente 11-1-0195. Recalcó que el término de cinco años de que trata la norma otrora referida no aplica en este caso, pues existe una decisión administrativa que declaró infractor de la norma urbanística al Club Campestre El Rancho por la ejecución de obras sin la obtención previa de licencia de construcción y que a pesar de que tal decisión no se encuentre ejecutoriada, en materia urbanística existe para el infractor la obligación de adecuarse a las normas urbanísticas y no se encuentra sujeto a condición alguna para la obtención de tal permiso.

Precisó que la petición de reconocimiento pudo haberse elevado incluso sin que mediara orden de la administración local y de igual manera la curaduría estaría en obligación de resolver e informar a las autoridades competentes para que adelanten los procesos y actuaciones a que hubiere lugar.

Aseguró que es violatorio del debido proceso que en el acto administrativo impugnado se asegure que la solicitud debe estudiarse según los lineamientos del inciso primero del artículo 64 del Decreto 1469 de 2010 según el cual para que sea viable el reconocimiento es necesario *“que la edificación se haya concluido como mínimo cinco años antes de la solicitud de reconocimiento”*, señalamiento que constituye un requisito no contemplado en la ley y que contraviene las disposiciones de la Ley 962 de 2005 y el Decreto Nacional 019 de 2012 que consagran los principios rectores de la política de racionalización de trámites.

Agregó que si bien los curadores urbanos son autónomos en el ejercicio de sus funciones, no resolver de fondo de la petición con fundamento en la falta de un requisito formal implica la exigencia de un requisito no contemplado previamente en la ley, que somete al interesado a la espera de la decisión de la administración distrital y está en contravía del artículo 8° de Decreto Distrital 194 de 2004 *“Por el cual se adopta el Plan maestro del Club Campestre El Rancho”*, máxime cuando mediante oficio No.11-1-07833 del 19 de julio de 2011, la curadora urbana saliente les informó que *“era viable expedir la solicitud de reconocimiento de construcciones”* creando una situación



Continuación de la Resolución No. 0 8 2 5

28 JUN. 2012

Por la cual se decide el recurso subsidiario de apelación interpuesto contra la Resolución RES 12-1-0040 del 25 de enero de 2012, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C., *"por medio de la cual se resuelve la solicitud de Reconocimiento de la Existencia de una Edificación y de Licencia de Reforzamiento Estructural, para el predio ubicado en la calle 194 No. 45-20, Urbanización HACIENDA EL OTOÑO de esta ciudad."*

favorable para el administrado, *"la cual es revertida en forma injustificada al no entrar a decidir sobre el fondo de la petición"*.

Que el 29 de febrero de 2012 con los radicados No. 12-10268 y 12-10269 los señores Nelson Alberto Martínez Garzón identificado con cédula de ciudadanía No. 79.118.125 y Rafael Puerto Cárdenas identificado con cédula de ciudadanía No. 79.141.065 interpusieron recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la RES 12-1-0040 y señalaron:

Que no es cierto que las edificaciones *"Refugio de Tenis"* y *"Hoyo 9"* del Club Campestre el Rancho estuvieran contempladas en el Decreto 194 de 2003 como puede constatarse en el plano P22 que señala las áreas a intervenir bajo el amparo de dicho Plan Maestro y que debe modificarse la parte considerativa del acto administrativo impugnado, en el sentido de señalar lo indicado por la Secretaría Distrital de Planeación sobre la modificación a este plan en caso de que se requiera realizar construcciones diferentes a las señaladas en el mencionado decreto.

Manifestaron que se debe proceder a la modificación del acto administrativo impugnado para *"ACLARAR y MODIFICAR"* lo referente a la *"conducta delictiva"* teniendo en cuenta que el curador urbano no es competente para valorar este tipo de actuaciones

Que el 9 de abril de 2012, el Curador Urbano 1 de la ciudad, mediante la Resolución RES 12-1-0189 negó las pretensiones de los recursos de reposición y concedió el recurso subsidiario de apelación ante la Secretaría Distrital de Planeación (folios 315 a 329).

Que el 24 de mayo de 2012, a través de la radicación de esta Secretaría No. 1-2012-23211 el Curador Urbano 1 de la ciudad, remitió el expediente contentivo de la actuación administrativa que culminó con el acto administrativo objeto de impugnación, con el fin de tramitar los recursos subsidiarios de apelación interpuesto (folio 347 y 348).

Que el 25 de mayo de 2012, el doctor Juan Carlos Procel Ramírez, mediante la radicación No. 1-2012-23452 allegó escrito mediante el cual amplía las consideraciones expuestas al momento de interponer el recurso de reposición.

RAZONAMIENTOS DEL DESPACHO

Corresponde a esta instancia decidir el recurso subsidiario de apelación interpuesto por el doctor Juan Carlos Procel Ramírez y los señores Nelson Alberto Martínez Garzón y Rafael



0 8 2 5

28 JUN. 2012

Continuación de la Resolución No. _____

Por la cual se decide el recurso subsidiario de apelación interpuesto contra la Resolución RES 12-1-0040 del 25 de enero de 2012, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C., *“por medio de la cual se resuelve la solicitud de Reconocimiento de la Existencia de una Edificación y de Licencia de Reforzamiento Estructural, para el predio ubicado en la calle 194 No. 45-20, Urbanización HACIENDA EL OTOÑO de esta ciudad.”*

Puerto Cárdenas contra la Resolución RES 12-1-0040 del 25 de enero de 2012, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

1. Procedencia

El recurso subsidiario de apelación es procedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Decreto Nacional 1469 de 2010, vigente para la época de radicación de la solicitud de la licencia de construcción.

2. Oportunidad

La notificación personal de la Resolución RES 12-1-0040 del 25 de enero de 2012 se surtió el 14 de febrero de 2012, al representante legal del Club Campestre El Rancho (folio 286).

El 21 de febrero de 2012, el doctor Juan Carlos Procel Ramírez en su condición de apoderado del mencionado club presentó personalmente mediante la radicación No. 12-10230 de la Curaduría Urbana 1 de la ciudad, los recursos de la vía gubernativa contra el citado acto administrativo, éstos se tienen presentados dentro del término de ley, teniendo en cuenta que los cinco (5) días hábiles para interponerlos vencían en dicha fecha.

Respecto de los demás intervinientes la notificación del acto impugnado fue surtida a través del edicto No. 12-0067 fijado el 9 de febrero de 2012 y desfijado el 22 de febrero y los recursos de los señores Nelson Alberto Martínez Garzón y Rafael Puerto Cárdenas interpuestos el día 29 de febrero por lo que se tienen presentados dentro del plazo legal.

En relación con el escrito de ampliación de argumentos del recurso de apelación presentado ante la SDP por el apoderado del Club Campestre El Rancho, es necesario que el mismo no puede ser tenido en consideración dentro de los razonamientos del despacho, dado que el procedimiento administrativo de que trata el Título II *“Vía Gubernativa”*, Capítulo I *“De los Recursos”* del Código Contencioso Administrativo no establece la presentación de escritos, alegatos o consideraciones con posterioridad a la radicación de los recursos presentados en oportunidad. Así, teniendo en cuenta que el procedimiento administrativo es reglado, el presente análisis se circunscribirá al escrito de impugnación obrante a folios 288 a 293.

3. Requisitos formales



Continuación de la Resolución No. 0 8 2 5

28 JUN. 2012

Por la cual se decide el recurso subsidiario de apelación interpuesto contra la Resolución RES 12-1-0040 del 25 de enero de 2012, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C., *“por medio de la cual se resuelve la solicitud de Reconocimiento de la Existencia de una Edificación y de Licencia de Reforzamiento Estructural, para el predio ubicado en la calle 194 No. 45-20, Urbanización HACIENDA EL OTOÑO de esta ciudad.”*

El recurso de apelación interpuesto por el doctor Juan Carlos Procel Ramírez se ajusta a lo preceptuado en el artículo 52 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que se presentó antes del vencimiento del plazo legal, personalmente, por escrito, sustentado con expresión concreta de los motivos de inconformidad, con indicación del nombre del recurrente (folios 288 a 293).

En relación con los recursos interpuestos por los señores Nelson Alberto Martínez Garzón y Rafael Puerto Cárdenas, se observa que los mismos no fueron interpuestos a través de apoderado en contravención de lo dispuesto por el artículo 34 del Decreto 019³ de 2012, el cual dispone *“ACTUACIÓN EN SEDE ADMINISTRATIVA. Excepto cuando se trate de la interposición de recursos, en ninguna otra actuación o trámite administrativo se requerirá actuar mediante abogado”*, razón por la cual no es procedente su estudio.

4. Problema jurídico

Corresponde a esta Secretaría, establecer si la negación del reconocimiento de existencia de una edificación solicitado por el Club Campestre El Rancho, se ajusta a las disposiciones legales vigentes, en particular a lo normado por el Decreto Nacional 1469 de 2010 para lo cual se estudiará: (i) la interpretación hecha por el curador urbano del artículo 64 del Decreto 1469 de 2010 en el caso bajo estudio; y ii) la presunta vulneración del derecho al debido proceso por la exigencia de un requisito aparentemente no exigido por la ley.

5. Análisis de los argumentos presentados en el recurso de apelación.

5.1 De la interpretación que hace el curador urbano del artículo 64 del Decreto Nacional 1469 de 2010 en ejercicio de su autonomía

5.1.1 Argumento del recurrente.

El recurrente señaló que la Resolución 12-1-0040 se fundamenta en una apreciación subjetiva por considerar que la solicitud de reconocimiento no cumple con el término de cinco años de que trata expresamente el artículo 64 del Decreto Nacional 1469 de 2010 sin tener presente la excepción que de dicho requisito establece esta disposición al indicar *“Este término no aplicará en*

³ *“Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.*



0 8 2 5

28 JUN. 2012

Continuación de la Resolución No. _____

Por la cual se decide el recurso subsidiario de apelación interpuesto contra la Resolución RES 12-1-0040 del 25 de enero de 2012, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C., *“por medio de la cual se resuelve la solicitud de Reconocimiento de la Existencia de una Edificación y de Licencia de Reforzamiento Estructural, para el predio ubicado en la calle 194 No. 45-20, Urbanización HACIENDA EL OTOÑO de esta ciudad.”*

aquellos casos en que el solicitante debe obtener el reconocimiento por orden judicial o administrativa”, desconociendo con ello lo ordenado por la Resolución 1086 de 2010⁴ expedida por el Alcalde Local de Suba la cual en su artículo 3° “advierte al querellado que dispone de un término de 60 días para que se adecue a las normas, obteniendo la licencia correspondiente o dejando el inmueble en las condiciones iniciales”.

Explicó que su representada dando cumplimiento a la orden impartida por la Alcaldía local de Suba, a pesar de haber impugnado la decisión, radicó la solicitud de reconocimiento de existencia de una edificación y de licencia de reforzamiento estructural de que trata el expediente 11-1-0195. También señaló que el término de cinco años de que trata la norma otrora referida no aplica en este caso, pues existe una decisión administrativa que declaró infractor de la norma urbanística al Club Campestre El Rancho por la ejecución de obras sin la obtención previa de licencia de construcción y que a pesar de que tal decisión no se encuentre ejecutoriada, en materia urbanística existe para el infractor la obligación de adecuarse a las normas urbanísticas y que éste no se encuentra sujeto a condición alguna para la obtención de tal permiso.

Precisó que la petición de reconocimiento pudo haberse elevado incluso sin que mediara orden de la administración local y de igual manera la curaduría estaría en obligación de resolver e informar a las autoridades competentes para que adelanten los procesos y actuaciones a que hubiere lugar.

El doctor Procel Ramírez adujo que si bien los curadores urbanos son autónomos en el ejercicio de sus funciones, no resolver de fondo la petición con fundamento en la falta de un requisito formal implica una exigencia no contemplada previamente en la ley, que somete al interesado a la espera de la decisión de la administración distrital y está en contravía del artículo 8° de Decreto Distrital 194 de 2004 *“Por el cual se adopta el Plan maestro del Club Campestre El Rancho”*.

Insistió en que desde el mes de julio de 2011, la Curaduría 1 informó que era viable expedir el reconocimiento de construcciones creando una situación favorable para el administrado, *“la cual es revertida en forma injustificada al no entrar a decidir sobre el fondo de la petición”*.

5.1.2 Posición de la SDP

⁴ “Por la cual se resuelve de fondo la actuación administrativa No. 131/2009 que se adelanta en contra del Club Campestre El Rancho con NIT8600103054 (...)”



0 8 2 5

Continuación de la Resolución No. _____

28 JUN. 2012

Por la cual se decide el recurso subsidiario de apelación interpuesto contra la Resolución RES 12-1-0040 del 25 de enero de 2012, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C., *“por medio de la cual se resuelve la solicitud de Reconocimiento de la Existencia de una Edificación y de Licencia de Reforzamiento Estructural, para el predio ubicado en la calle 194 No. 45-20, Urbanización HACIENDA EL OTOÑO de esta ciudad.”*

Para darle respuesta a cada uno de los argumentos del recurrente este despacho hará referencia a la firmeza de los actos administrativos y a la eventual suspensión de sus efectos, no sin antes señalar la existencia y eficacia de los mismos, para lo cual es preciso referirse a la sentencia la sentencia C-069 de 1995 de la Corte Constitucional⁵, que al respecto ha indicado lo siguiente

“La existencia del acto administrativo está ligada al momento en que la voluntad de la Administración se manifiesta a través de una decisión. El acto administrativo existe, tal como lo señala la doctrina, desde el momento en que es producido por la Administración, y en sí mismo lleva envuelta la prerrogativa de producir efectos jurídicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo está ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su expedición, condicionada, claro está, a la publicación o notificación del acto, según sea de carácter general o individual. El Consejo de Estado ha expresado su criterio en reiteradas oportunidades en cuanto que el acto administrativo existe desde que se expide, y su eficacia está condicionada a su publicación o notificación. A juicio de la Corte Constitucional es aceptable el criterio mencionado, según el cual los actos administrativos existen desde el momento en que se profieren, y su validez y eficacia están condicionadas a la publicación o notificación, según se trate de un acto de carácter general, impersonal y abstracto, o de un acto de carácter particular, personal y concreto.

La eficacia del acto administrativo se debe pues entender encaminada a producir efectos jurídicos. De lo anterior se colige que la eficacia del acto comporta elementos de hecho, pues una decisión administrativa adoptada de conformidad con el ordenamiento jurídico superior, cobijada por presunción de constitucionalidad y de legalidad, puede constituir un acto administrativo perfecto pero ineficaz. Así mismo, una decisión viciada de nulidad por no cumplir con todos los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico superior, puede llegar a producir efectos por no haber sido atacada oportunamente” (Sublínea y negrilla fuera de texto).

Fíjese que como lo señala la jurisprudencia citada, el acto administrativo existe desde el mismo instante en que lo produce la administración, pero su eficacia puede estar condicionada; tal es el caso de los actos administrativos a los cuales se le suspenden sus efectos mientras la administración resuelve los recursos de la vía gubernativa. Aquellos sólo producirán efectos hasta que se establezca su firmeza, es decir una vez se resuelvan los recursos que se interpusieron contra los mismos.

⁵ Sentencia C-069 de 1995. M.P. HERNANDO HERRERA VERGARA.



0 8 2 5

28 JUN. 2012

Continuación de la Resolución No. _____

Por la cual se decide el recurso subsidiario de apelación interpuesto contra la Resolución RES 12-1-0040 del 25 de enero de 2012, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C., *“por medio de la cual se resuelve la solicitud de Reconocimiento de la Existencia de una Edificación y de Licencia de Reforzamiento Estructural, para el predio ubicado en la calle 194 No. 45-20, Urbanización HACIENDA EL OTOÑO de esta ciudad.”*

Ahora bien, respecto de la firmeza de los actos administrativos, el artículo 64 del Código Contencioso Administrativo dispone que *“los actos administrativos que queden en firme al concluir el procedimiento administrativo serán suficientes, por sí mismos, para que la administración pueda ejecutar de inmediato los actos necesarios para su cumplimiento. La firmeza de tales actos es indispensable para la ejecución contra la voluntad de los interesados”* Esta disposición estableció la característica de ejecutoriedad del acto administrativo, en virtud de la cual la Administración puede imponerlo unilateralmente, mediante las actuaciones pertinentes; pero, esa ejecutoriedad está sujeta a que el acto adquiriera firmeza, la cual se da en los casos que señala el artículo 62 ibídem:

“Artículo 62 Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedarán en firme:

- 1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso.*
- 2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido.*
- 3. Cuando no se interpongan recursos, o cuando se renuncie expresamente a ellos.*
- 4. Cuando haya lugar a la perención, o cuando se acepten los desistimientos”.*

Significa lo anterior, que el acto administrativo adquiere su firmeza y por tanto tiene la potencialidad de generar efectos jurídicos cuando se han resuelto los recursos de la vía gubernativa y la administración a tenido la oportunidad de revisar y ratificar su decisión.

En materia de recursos contra los actos administrativos es necesario precisar que el artículo 55 del Código Contencioso Administrativo dispone que aquellos se conceden en el efecto suspensivo, siendo esta la regla general, lo que significa que las excepciones a la misma deben regularse en legislación procedimental especial; situación que para el caso particular no ha sido instituida por el Decreto Nacional 1469 de 2010.

Refiriéndose al artículo 55 citado la Corte Constitucional en Sentencia T-1091 de 2001, se ha manifestado así:

“(…)

Es claro que si lo pretendido por el actor mediante la acción de tutela es la suspensión de los efectos de un acto administrativo que considera violatorio de sus derechos constitucionales fundamentales o una amenaza de los mismos, ésta no está llamada a prosperar cuando contra tal decisión administrativa se han interpuesto los recursos de reposición y/o apelación.

Lo anterior, por cuanto al tenor del artículo 55 del Código Contencioso Administrativo,



0 8 2 5

Continuación de la Resolución No. _____

28 JUN. 2012

Por la cual se decide el recurso subsidiario de apelación interpuesto contra la Resolución RES 12-1-0040 del 25 de enero de 2012, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C., “por medio de la cual se resuelve la solicitud de Reconocimiento de la Existencia de una Edificación y de Licencia de Reforzamiento Estructural, para el predio ubicado en la calle 194 No. 45-20, Urbanización HACIENDA EL OTOÑO de esta ciudad.”

ha de imponerse la suspensión de los actos administrativos recurridos hasta tanto no se decidan los recursos de la vía gubernativa. Sólo en casos excepcionales, el efecto que ordena la ley es el devolutivo, de lo contrario, tendría que decirse que carece de objeto la tutela interpuesta con el único fin de suspender los efectos de una decisión administrativa, que de por sí, se encuentran suspendidos porque así lo ordena el efecto en que se conceden los recursos interpuestos.

Sobre el particular, en la Sentencia T-1483 de 20001 esta Corte sostuvo:

“Aplicados estos criterios, se observa por la Corte, que el artículo 55 del Código Contencioso Administrativo ordena que los recursos en la vía gubernativa se concedan en el efecto suspensivo. Ello significa, como es de sobra conocido, que el acto administrativo objeto de la impugnación con esos recursos, no puede surtir ningún efecto jurídico mientras la impugnación aludida este pendiente de decisión, ya sea por la propia autoridad que lo profirió, o por su superior jerárquico.

“Tanto es ello así, que el propio legislador, con la ostensible finalidad de proteger a las personas naturales o jurídicas de la arbitrariedad eventual de las autoridades administrativas, en forma perentoria dispuso que la ejecución de un acto administrativo que no se encuentre en firme, esto es, antes de resolver los recursos interpuestos, constituye grave falta disciplinaria del funcionario, calificada como mala conducta, sancionable con multas o con destitución, según lo dispuesto por el artículo 76-7 del Código Contencioso Administrativo” (Sublínea y negrillas fuera de texto).

Este despacho acoge el análisis de la Corte Constitucional en el sentido de considerar que el acto administrativo a través del cual se declaró infractor al Club Campestre El Rancho y se le impuso una sanción, se encuentra suspendido, hasta tanto se notifique la decisión que resuelva el recurso de apelación interpuesto contra éste, ya que de lo contrario, la autoridad en cuyo cargo recae la obligación de ejecutar el acto, incurriría en la infracción de la ley, en los términos de artículo 76 del C.C.A. Por lo tanto, ni la Alcaldía Local de Suba, ni el Curador Urbano ante quien se inició el procedimiento urbanístico de reconocimiento de existencia de edificaciones, están facultados para ejecutar las disposiciones de la Resolución 1086 del 12 de noviembre de 2010.

En el análisis de los documentos que obran dentro del expediente de acto que se recurre, se tiene que a folio 252 del expediente, se encuentra la comunicación suscrita por el Alcalde Local de Suba el 21 de septiembre de 2009 a través de la cual se informa a la Curaduría Urbana 4 que “la resolución 1089 (sic) proferida el 12 de noviembre de 2010 aún no se encuentra en firme y ejecutoriada”. Nótese que si bien el acto le ordena al infractor adecuarse a las normas urbanísticas y obtener el



0 8 2 5

Continuación de la Resolución No. _____

28 JUN. 2012

Por la cual se decide el recurso subsidiario de apelación interpuesto contra la Resolución RES 12-1-0040 del 25 de enero de 2012, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C., *“por medio de la cual se resuelve la solicitud de Reconocimiento de la Existencia de una Edificación y de Licencia de Reforzamiento Estructural, para el predio ubicado en la calle 194 No. 45-20, Urbanización HACIENDA EL OTOÑO de esta ciudad.”*

permiso correspondiente, tales actuaciones no pueden adelantarse hasta tanto se defina la sanción por el Consejo de Justicia de manera desfavorable a las pretensiones, esto es, confirmando la sanción impuesta al Club Campestre El Rancho, en virtud de lo indicado por los artículos 55, 62 y 64 del Código Contencioso Administrativo.

En referencia a la *“firmeza”* del acto administrativo, se observa que el recurrente interpreta equivocadamente este concepto, pues no es cierto que sus efectos se encuentran suspendidos solamente para la administración y que el particular pueda proceder a su ejecución de manera inmediata. La actuación surtida por el apoderado del Club Campestre El Rancho es contradictoria ya que de una parte impugna el acto que sanciona a su poderdante, pero de otro, pretende darle cumplimiento parcial en cuanto al trámite de reconocimiento de edificaciones. Si el recurrente considera que el acto sancionatorio debe surtir efectos jurídicos es porque conviene en que cometió una infracción. En tal caso podría desistir del recurso contra el acto impuesto por la alcaldía local y proceder a tramitar el reconocimiento. No obstante, de los documentos que reposan en el expediente no se sigue que algo así se haya producido. El recurrente con tal conducta contraviene las orientaciones que en materia de interpretación de la ley, señala el Código Civil particularmente los artículos 27⁶ inciso 1 y 28⁷. Esto, porque del artículo 55 del C.C.A, se infiere sin lugar a equívocos que el acto se suspende en todos sus efectos y que esta disposición no otorga facultad alguna al administrado para ejecutar la orden impartida en lo que a su juicio considere.

Sobre el particular vale la pena aclarar que tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden en definir el acto administrativo en el sentido expuesto por el Consejo de Estado en la siguiente cita:

*“(…) Doctrinaria y jurisprudencialmente, un acto administrativo es toda manifestación de voluntad de la Administración que produce efectos jurídicos. Esto quiere decir, que un pronunciamiento de la Administración es un acto administrativo si tiene por contenido crear, extinguir o modificar una situación jurídica general o particular.”*⁸

Como se puede observar, de la esencia del acto administrativo es que genere efectos jurídicos. La existencia del acto está ligada estrechamente a su firmeza y por tanto, hasta tanto esta última

⁶ Artículo 27 “Cuando el sentido de la Ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu (...)”

⁷ Artículo 28 “Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras (...)”

⁸ CONSEJO DE ESTADO. Sentencia de 5 de mayo de 2011. C.P. Hugo Fernando Bastidas Barcenás.



0825

28 JUN. 2012

Continuación de la Resolución No. _____

Por la cual se decide el recurso subsidiario de apelación interpuesto contra la Resolución RES 12-1-0040 del 25 de enero de 2012, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C., *“por medio de la cual se resuelve la solicitud de Reconocimiento de la Existencia de una Edificación y de Licencia de Reforzamiento Estructural, para el predio ubicado en la calle 194 No. 45-20, Urbanización HACIENDA EL OTOÑO de esta ciudad.”*

no se alcance, no se puede hablar acto administrativo en su sentido pleno. En tal sentido, señala el máximo tribunal de lo contencioso administrativo *“Sólo los actos administrativos son los que ostentan el carácter ejecutivo y ejecutorio para que la Administración pueda hacerlos cumplir o ejecutar contra la voluntad de los interesados (artículo 64 ibídem).”*

Por otro lado, en relación con el argumento del recurrente en el que cuestiona la interpretación hecha por el curador en el acto que se recurre, este despacho considera pertinente señalar que la misma Curaduría 1, a través de la Resolución 12-1-0189⁹ de 9 de abril de 2012, contesta el cuestionamiento haciendo referencia a la autonomía de la autoridad administrativa expuso:

“(…) Al respecto, es pertinente aclarar:

La designación de los Curadores urbanos, su permanencia, funciones y demás aspectos atinentes a esta figura tiene un marco jurídico especial, contenido, entre otras disposiciones en la ley 388 de 1997 y su Decreto reglamentario 1469 de 2010. Este último define características excepcionales con relación a esta figura, dentro de las que se destacan las siguientes:

- Particular encargado de ejercer una función pública para la verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes (Artículos 73 y 74)*
- Autonomía en el ejercicio de sus funcione (...).*

(…) El curador urbano es “un particular” designado para un periodo de cinco (5) años, con autonomía y responsabilidad frente a las actuaciones que adelante en el periodo de ejercicio de su cargo... al curador urbano entrante le correspondía la verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes para efectos de adoptar la decisión sobre el trámite en comento. El concepto emitido por la curadora urbana anterior si bien fue analizado dentro de tal verificación, no configuraba la generación de una situación de carácter particular y concreto a favor de los solicitantes, que obligara al nuevo curador a emitir el reconocimiento, en contra de las disposiciones legales vigentes; dicho en otras palabras, el trámite recibido constituía una mera expectativa, la cual, como es bien sabido, no constituye derecho frente a la Ley(Art.17 de la Ley 153 de 1887)”.

En efecto, la anterior posición ha sido confirmada por la honorable Corte Constitucional¹⁰ quien

⁹ Por la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución No. RES 12-1-0040, expedida el 25 de enero de 2012, por medio de la cual se negó la solicitud de reconocimiento de existencia de edificación y de reforzamiento estructural para el predio ubicado en la CL 194 No. 45-20, Urbanización HACIENDA EL OTOÑO de esta ciudad.

¹⁰ Sentencia T- 397/08 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.



0 8 2 5

28 JUN. 2012

Continuación de la Resolución No. _____

Por la cual se decide el recurso subsidiario de apelación interpuesto contra la Resolución RES 12-1-0040 del 25 de enero de 2012, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C., *“por medio de la cual se resuelve la solicitud de Reconocimiento de la Existencia de una Edificación y de Licencia de Reforzamiento Estructural, para el predio ubicado en la calle 194 No. 45-20, Urbanización HACIENDA EL OTOÑO de esta ciudad.”*

en relación con la autonomía interpretativa de las autoridades administrativas ha determinado lo siguiente:

“(…) los funcionarios públicos se enfrentan a un marco interpretativo dentro del cual están, prima facie, en libertad de seleccionar la opción hermenéutica (sentido normativo) que consideren ajustada al texto positivo, tanto Constitucional como legal. El carácter prima facie de la autonomía interpretativa del funcionario, se deriva de la existencia de funciones institucionales para fijar los sentidos admisibles de un texto legal o constitucional.

Sobre el particular ha afirmado la Corte Constitucional:

“Así, en el ámbito del derecho común, corresponde a la casación la tarea de unificar la interpretación de los textos legales; función que, de igual manera, se ejerce en el ámbito del derecho público por parte del Consejo de Estado. Así mismo, la interpretación que de la Constitución hace la Corte Constitucional o las restricciones a las interpretaciones admisibles de las normas legales que impone en sede de control. Habiéndose institucionalizado una determinada interpretación de un texto, el aplicador está en la obligación de seguir las orientaciones de las autoridades judiciales, aunque goce de la facultad –restringida– de apartarse de dichas interpretaciones, salvedad hecha de las decisiones de exequibilidad que son imperativas en ciertos casos (C.P. art. 243).”

Así las cosas, ante la existencia de varias interpretaciones de un texto normativo, de las cuales ninguna desconoce la Constitución y en ausencia de una interpretación institucionalizada, la autoridad administrativa goza de mayor amplitud en la valoración del sentido y alcance del texto. De allí que la solución de controversias interpretativas en el orden legal sea tarea de los jueces ordinarios o la jurisdicción contenciosa administrativa y que la Corte únicamente intervendrá en dicho conflicto cuando éste adquiera connotación constitucional; es decir, cuando se afectan los derechos fundamentales de los destinatarios de la norma. Dicho fenómeno, ha señalado esta Corporación, se presenta cuando: “(1) la interpretación efectuada por el funcionario es manifiestamente irrazonable, y, (2) la interpretación propuesta por los actores es la única admisible a la luz del texto constitucional”.

Revisada la actuación del curador urbano, se tiene que la misma se ajusta al pronunciamiento jurisprudencial transcrito, pues no se excedió en el ejercicio de sus competencias, como tampoco ha vulnerado los artículos 31¹¹ y 75¹² del Decreto Nacional 1469 de 2010; esto, porque

¹¹ Artículo 31. *De la revisión del proyecto.* El curador urbano o la autoridad encargada de estudiar, tramitar y expedir las licencias, deberá revisar el proyecto objeto de la solicitud, desde el punto de vista jurídico, urbanístico, arquitectónico y del Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente -NSR- 10, y la norma que lo adicione, modifique o sustituya; a fin de verificar el cumplimiento del proyecto con las normas urbanísticas y de edificación vigentes.



0 8 2 5

Continuación de la Resolución No. _____

28 JUN. 2012

Por la cual se decide el recurso subsidiario de apelación interpuesto contra la Resolución RES 12-1-0040 del 25 de enero de 2012, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C., *“por medio de la cual se resuelve la solicitud de Reconocimiento de la Existencia de una Edificación y de Licencia de Reforzamiento Estructural, para el predio ubicado en la calle 194 No. 45-20, Urbanización HACIENDA EL OTOÑO de esta ciudad.”*

en efecto su obligación es la de verificar el cumplimiento de la normativa urbanística con sujeción a las disposiciones en referencia.

En concordancia con lo anterior, esta secretaría señala que carece de sustento el argumento que plantea el recurrente cuando sostiene que el Curador 1 que expidió el acto que se estudió no tuvo en cuenta la aprobación previa del trámite de reconocimiento que había hecho la curadora anterior. Al respecto, es preciso resaltar que el Decreto Nacional 1469 no indica en manera alguna la obligación para el curador urbano de acoger la revisión que con antelación al ejercicio de este último hubiese realizado el curador anterior, precisamente porque éste es autónomo en el ejercicio de sus funciones. El señalamiento del recurrente referido a que con el oficio No. 11-1-07833 del 19 de julio de 2011 se creó una situación favorable para el administrado, *“la cual es revertida en forma injustificada al no entrar a decidir sobre el fondo de la petición”*, no resulta procedente por cuanto no estamos en presencia de un derecho adquirido que deba ser protegido, la manifestación de la curadora anterior, no constituye una situación jurídica individual consolidada¹³.

Ahora bien, respecto a la actuación iniciada por el Club Campestre El Rancho, bajo el supuesto de que la sanción administrativa por infracción del régimen urbanístico se encontrará en firme, este despacho considera de especial importancia referirse a lo dispuesto por el artículo 64 del Decreto Nacional 1469 de 2010¹⁴.

El artículo en comento dispone:

“Artículo 64. Reconocimiento de la existencia de edificaciones. El reconocimiento de edificaciones es la actuación por medio de la cual el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias de construcción, declara la existencia de los desarrollos arquitectónicos que se ejecutaron sin obtener tales

La revisión del proyecto se podrá iniciar a partir del día siguiente de la radicación, pero los términos para resolver la solicitud empezarán a correr una vez haya sido radicado en legal y debida forma (...).

¹² Artículo 75. *Autonomía y responsabilidad del curador urbano.* El curador urbano es autónomo en el ejercicio de sus funciones y responsable disciplinaria, fiscal, civil y penalmente por los daños y perjuicios que causen a los usuarios, a terceros o a la administración pública en el ejercicio de su función pública.

¹³ Ver sentencias C-147 de 1997 y C-983 de 2010, Magistrados Ponentes Antonio Barrera Carbonell y Luis Ernesto Vargas Silva, respectivamente

¹⁴ “Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones”.



Continuación de la Resolución No. 0 8 2 5

28 JUN. 2012

Por la cual se decide el recurso subsidiario de apelación interpuesto contra la Resolución RES 12-1-0040 del 25 de enero de 2012, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C., *"por medio de la cual se resuelve la solicitud de Reconocimiento de la Existencia de una Edificación y de Licencia de Reforzamiento Estructural, para el predio ubicado en la calle 194 No. 45-20, Urbanización HACIENDA EL OTOÑO de esta ciudad."*

licencias siempre y cuando cumplan con el uso previsto por las normas urbanísticas vigentes y que la edificación se haya concluido como mínimo cinco (5) años antes de la solicitud de reconocimiento. Este término no aplicará en aquellos casos en que el solicitante deba obtener el reconocimiento por orden judicial o administrativa.

(...)"

Una vez analizada la información que de la actuación administrativa por infracción a las normas urbanísticas se aportó al expediente No. 11-1-0195 y que culminó con la expedición de la Resolución No. 1086 del 12 de noviembre de 2010 (folios 82 a 87), se observa que la misma resolvió:

"(...)

"TERCERO: Advertir al Club Campestre el Rancho por medio de su representante legal, que dispone de un plazo máximo de sesenta (60) días para que se adecue a las normas, obteniendo la licencia correspondiente o dejándolo en las condiciones iniciales; si vencido este plazo no se hubiere obtenido la licencia se procederá a ordenar la demolición de las obras ejecutadas a costa del interesado de acuerdo a lo preceptuado en el inciso 1° del Artículo 3° de la ley 810 de 2003 que modificó el artículo 105 de la ley 388 de 1997"

(...)

"QUINTO: Se hace saber a los sujetos procesales que contra la presente resolución proceden los recursos de reposición ante esta misma alcaldía y el de apelación ante el Consejo de Justicia del Distrito Capital, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación".

De la interpretación literal del numeral tercero de la Resolución 1086 de 2010 expedida por la Alcaldía Local de Suba, se concluye que el trámite ordenado por la autoridad local a los infractores no es el de *"reconocimiento de la existencia de edificaciones"*. Tal decisión ordenó de manera expresa que el infractor se *"adecue a las normas obteniendo la licencia correspondiente o dejándolo en las condiciones iniciales"*, lo cual permite inferir que el solicitante confunde el procedimiento de *"reconocimiento de existencia de edificaciones"* con el de *"licencia de construcción"*, los cuales son regulados distintamente por el Decreto 1469 de 2010 como en efecto explicó el curador urbano en sede de reposición al expresar que *"La Ley 810 de 2003, a través del artículo 3 modificó el artículo 105 de la Ley 388 de 1997, que en cuanto a "Adecuación a las normas por construcciones ejecutadas con licencia (entre otros aspectos), dispuso en el inciso primero que "En lo casos previstos en el numeral 3 del artículo precedente, en el mismo acto que imponga la sanción se ratificará la medida policiva de*



0 8 2 5

Continuación de la Resolución No. _____

28 JUN. 2012

Por la cual se decide el recurso subsidiario de apelación interpuesto contra la Resolución RES 12-1-0040 del 25 de enero de 2012, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C., *“por medio de la cual se resuelve la solicitud de Reconocimiento de la Existencia de una Edificación y de Licencia de Reforzamiento Estructural, para el predio ubicado en la calle 194 No. 45-20, Urbanización HACIENDA EL OTOÑO de esta ciudad.”*

suspensión y sellamiento de las obras y se dispondrá de un plazo de sesenta días para que el infractor se adecue a las normas obteniendo la licencia correspondiente. Si vencido este plazo no se hubiere obtenido la licencia, se procederá a ordenar la demolición de las obras (...)

Y más adelante, explicó *“es claro que el término se sesenta (60) días es para obtener la licencia correspondiente, lo que comporta el total cumplimiento de las normas urbanísticas, arquitectónicas y de sismo resistencia...Pero en el presente caso que nos ocupa, no estamos frente aun TRAMITE DE SOLICITUD DE LICENCIA, sino frente a una solicitud de reconocimiento (...). Si se retoma lo analizado en precedencia en el sentido de que en segunda instancia se definirán las circunstancias jurídicas de la Resolución del Alcalde Local de Suba, podría ocurrir que el consejo de justicia haga claridad sobre este aspecto, definiendo si lo que procede en este caso es la obtención de una licencia o de un reconocimiento de edificación, circunstancia necesaria para que los solicitantes puedan definir el derrotero a seguir.”* (Sublínea fuera de texto)

Examinada la actuación adelantada por el Curador Urbano 1, se constata que en la misma sí se resolvió el fondo de la solicitud, pues es innegable que los presupuestos del reconocimiento de construcción de que trata el Decreto Nacional 1469 no confluyen en la presente actuación dado que el acto administrativo sancionatorio no está en firme y tampoco ha transcurrido el término de cinco (5) años de ejecución de las obras; por lo que es procedente negar el *“reconocimiento de existencia de una edificación en la modalidad de reforzamiento estructural”* solicitado. En tal sentido el argumento esgrimido por el recurrente no está llamado a prosperar.

5.2 Presunta vulneración del debido proceso.

5.2.1 Argumento del recurrente

El apelante aseguró que es violatorio del debido proceso que en el acto administrativo impugnado se asegure que la solicitud debe estudiarse según los lineamientos del inciso primero del artículo 64 del Decreto 1469 de 2010 según el cual para que sea viable el reconocimiento es necesario *“que la edificación se haya concluido como mínimo cinco años antes de la solicitud de reconocimiento”*, señalamiento que constituye un requisito no contemplado en la ley y que contraviene las disposiciones de la Ley 962 de 2005 y el Decreto Nacional 019 de 2012 que consagran los principios rectores de la política de racionalización de trámites.

5.2.2 Posición de la SDP.

Sobre las características del procedimiento administrativo la Corte Constitucional¹⁵ ha

¹⁵ Sentencia C- 640 de 2002. M.P Marco Gerardo Monroy Cabra.



Continuación de la Resolución No. 0 8 2 5 28 JUN. 2012

Por la cual se decide el recurso subsidiario de apelación interpuesto contra la Resolución RES 12-1-0040 del 25 de enero de 2012, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C., “por medio de la cual se resuelve la solicitud de Reconocimiento de la Existencia de una Edificación y de Licencia de Reforzamiento Estructural, para el predio ubicado en la calle 194 No. 45-20, Urbanización HACIENDA EL OTOÑO de esta ciudad.”

determinado:

“(…) A partir de una concepción del procedimiento administrativo que lo entiende con un conjunto de actos independientes pero concatenados con miras a la obtención de un resultado final que es la decisión administrativa definitiva, cada acto, ya sea el que desencadena la actuación, los instrumentales o intermedios, el que le pone fin, el que comunica este último y los destinados a resolver los recursos procedentes por la vía gubernativa, deben responder al principio del debido proceso. Pero como mediante el procedimiento administrativo se logra el cumplimiento de la función administrativa, el mismo, adicionalmente a las garantías estrictamente procesales que debe contemplar, debe estar presidido por los principios constitucionales que gobiernan la función pública y que enuncia el canon 209 superior. Estos principios son los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad”.

Analizado el argumento presentado por el recurrente, se observa que es una apreciación subjetiva encaminada a predicar que hubo vulneración del derecho al debido proceso administrativo por la exigencia de requisitos no estipulados en la ley.

En relación con este derecho, es importante citar lo señalado por la Corte Constitucional¹⁶:

*“En materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que los principios generales que informan el derecho fundamental al debido proceso se aplican igualmente a todas las actuaciones administrativas que desarrolle la administración pública en el cumplimiento de sus funciones y realización de sus objetivos y fines, de manera que se garantice: (i) el acceso a procesos justos y adecuados; (ii) **el principio de legalidad y las formas administrativas previamente establecidas**; (iii) los principios de contradicción e imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los asociados. Todas estas garantías se encuentran encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la función pública administrativa, de conformidad con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los derechos de los ciudadanos, y de contera evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias por parte de la administración a través de la expedición de actos administrativos que resulten lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho (…)”*

Una lectura exegética del artículo 64 del Decreto Nacional 1469 de 2010 permite inferir sin lugar a dudas que el reconocimiento de existencia de edificaciones es procedente en dos casos:

¹⁶ Sentencia C- 983 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.



0825

Continuación de la Resolución No. _____

28 JUN. 2012

Por la cual se decide el recurso subsidiario de apelación interpuesto contra la Resolución RES 12-1-0040 del 25 de enero de 2012, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C., *"por medio de la cual se resuelve la solicitud de Reconocimiento de la Existencia de una Edificación y de Licencia de Reforzamiento Estructural, para el predio ubicado en la calle 194 No. 45-20, Urbanización HACIENDA EL OTOÑO de esta ciudad."*

1. Cuando se ha ejecutado un desarrollo arquitectónico sin la obtención previa de licencia y la construcción supera 5 años y;
2. Cuando se deba obtener el reconocimiento por orden judicial o administrativa.

Siguiendo la interpretación efectuada por el órgano supremo constitucional se tiene como cierto que el Curador Urbano 1 ha ejercido su función de conformidad con *"el principio de legalidad y las formas administrativas previamente establecidas"*, toda vez que realizó el estudio de la solicitud atendiendo no sólo las competencias que le son asignadas por la ley, sino también las exigencias de que tratan los artículos 31¹⁷, 64 y 74¹⁸ del Decreto Nacional 1469 de 2010, de tal manera la negativa de conceder el *"reconocimiento de existencia de una edificación"* solicitado no constituye en manera alguna la exigencia de un requisito no contemplado en la ley. Se trata de la interpretación literal y auténtica del artículo 64 ibídem y dado que lo solicitado no se ajusta a esta norma, mal haría el curador en expedir un permiso urbanístico respecto de unas obras que no se ajustan a la ley.

Entretanto es por la anterior interpretación que el curador determinó que no se dan los presupuestos normativos del reconocimiento de edificaciones pues la edificación no cuenta con más de cinco (5) años de construida, y tampoco la Alcaldía Local de Suba ordenó adelantar tal procedimiento.

En suma, esta Secretaria considera que no le asiste razón al recurrente en ninguno de los cuestionamientos hechos a la resolución RES 12-1-0040 del 25 de enero de 2012, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C., *"por medio de la cual se resuelve la solicitud de Reconocimiento de la Existencia de una Edificación y de Licencia de Reforzamiento Estructural, para el predio ubicado en la calle 194 No. 45-20, Urbanización HACIENDA EL OTOÑO de esta ciudad"*, por lo que no se revoca y se confirma en su totalidad.

¹⁷ **Artículo 31.** De la revisión del proyecto. El curador urbano o la autoridad encargada de estudiar, tramitar y expedir las licencias, deberá revisar el proyecto objeto de la solicitud, desde el punto de vista jurídico, urbanístico, arquitectónico y del Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente -NSR- 10, y la norma que lo adicione, modifique o sustituya; a fin de verificar el cumplimiento del proyecto con las normas urbanísticas y de edificación vigentes.

¹⁸ **Artículo 74.** *Naturaleza de la función del curador urbano.* El curador urbano ejerce una función pública para la verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes, a través del otorgamiento de licencias de parcelación, urbanización, subdivisión y de construcción.



Continuación de la Resolución No. 0 8 2 5 28 JUN. 2012

Por la cual se decide el recurso subsidiario de apelación interpuesto contra la Resolución RES 12-1-0040 del 25 de enero de 2012, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C., *"por medio de la cual se resuelve la solicitud de Reconocimiento de la Existencia de una Edificación y de Licencia de Reforzamiento Estructural, para el predio ubicado en la calle 194 No. 45-20, Urbanización HACIENDA EL OTOÑO de esta ciudad."*

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Negar las pretensiones invocadas en los recursos de apelación interpuestos contra la Resolución RES 12-1-0040 de 25 de enero de 2012, emitida por el Curador Urbano 1 de la ciudad, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente decisión.

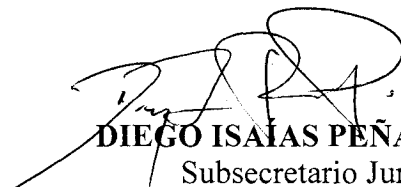
ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar la presente decisión al doctor Juan Carlos Procel Ramírez, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.148.149 de Bogotá y Tarjeta Profesional 37.452 en calidad de apoderado especial del Club Campestre El Rancho, advirtiéndole que con ella queda agotada la vía gubernativa.

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar la presente decisión a los señores Nelson Alberto Martínez Garzón identificado con cédula de ciudadanía No. 79.118.125 de Bogotá y Rafael Puerto Cárdenas identificado con cédula de ciudadanía No. 79.141.065 de Bogotá, en su calidad de terceros intervinientes advirtiéndoles que con ella queda agotada la vía gubernativa.

ARTÍCULO CUARTO. Devolver el expediente a la Curaduría Urbana 1 de Bogotá D.C., en firme esta Resolución.

Dada en Bogotá D.C., a los 28 JUN. 2012

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.


DIEGO ISAIAS PEÑA PORRAS
Subsecretario Jurídico

Revisó: Adriana del Pilar Vergara Sánchez – Directora de Trámites Administrativos
Proyectó: Samaris Ceballos García Profesional Especializado.